

# Editorial

*Joan Miguel Tejedor Estupiñán<sup>1</sup>*

## **Relaciones entre la productividad y los salarios en Colombia**

Una de las preguntas que se plantean algunos académicos e investigadores economistas y los decisores de políticas económicas de los diferentes gobiernos en la actualidad es la siguiente: ¿con qué criterios distribuir los beneficios obtenidos del crecimiento económico, impulsado por los incrementos en la productividad de los factores de producción? Esto ha llevado a que los gobiernos en diferentes regiones establezcan agendas de integración y adopten políticas económicas que han afectado, tanto a la economía, como a la población en términos de equidad y justicia.

Clavijo (2003) diferencia tres momentos importantes del tema de la productividad en Colombia. El primero, en junio de 1988 y a cargo de la administración de Virgilio Barco, fundó las bases para la apertura económica. Un segundo momento se dio en la administración de César Gaviria, a mediados de 1990, donde se aceleró el proceso de apertura comercial, el cual se caracterizó por el aumento del régimen de libre importación y por ende una disminución de las políticas proteccionistas, hecho que se evidenció en el desmonte a la sobretasa de importaciones. La tercera etapa se dio en la administración de Ernesto Samper, en la cual se pasó del tema de la apertura comercial al Pacto Social, inspirado en las políticas de ingresos y salarios, aplicadas en Estados Unidos en los años setenta, y en México en los ochenta. Allí se creó una consejería presidencial con el fin de conciliar los temas salariales en relación con la productividad.

En relación con el crecimiento económico, la producción en Colombia creció a una tasa promedio de 2,6 % en el periodo 1990-2002; entre 2004 y 2011 ha crecido a un ritmo de 4,8 % (Cepal, 2012), lo cual, según Clavijo (2003), representa un desempeño pobre de la economía nacional, frente al crecimiento promedio de 5,1 % registrado entre 1950-1980. Esto nos muestra la etapa de desaceleración que sufrió la economía colombiana hasta el año 2002 y la aparente recuperación desde entonces, hasta el año 2011. Dicha recuperación se ha dado en el marco del aumento de los tratados comerciales con diferentes países y regiones como Estados Unidos y la Unión Europea, y a nivel regional con los países pertenecientes a la CAN, Mercosur y Aladi, los cuales han incrementado las importaciones de manufacturas y tecnología, y han aumentado las exportaciones de recursos minero-energéticos hacia estos mismos países.

La productividad laboral y multifactorial en Colombia entre 1950-1966 ha sido del orden de 1,6 %, entre 1967-1974 se incrementó hasta 3,2 %, luego comenzó a desacelerarse llegando entre 1975-1980 a un 0,3 %, hasta caer a -3,0 % durante los ochenta. En el periodo de 1990-2002, la productividad laboral apenas fue de 0,4 % anual, siendo una de las más bajas en América Latina. Mientras

<sup>1</sup> Magíster en Derechos Humanos y economista. Editor de la *Revista Finanzas y Política Económica* de la Universidad Católica de Colombia. Correo electrónico: jmtejedor@ucatolica.edu.co. Dirección de correspondencia: Facultad de Economía, Universidad Católica de Colombia, Carrera 13 N. 47-49 (Bogotá, Colombia).

tanto, entre 1950-1980 la productividad multifactorial en Colombia fue de 0,8 % anual, y cayó a un promedio de -1,5 % entre los años 1981-2002. Según Clavijo (2003), esto es evidencia de un desempeño mediocre de la productividad nacional, comparado con los desempeños de 1,3 % de Taiwán, Corea del Sur, Singapur y Hong Kong y el 1,2 % de Indonesia, Malasia y Taiwán, donde las políticas educativas juegan un papel fundamental.

Con relación al salario en Colombia, los estudios de Arango *et al.* (2004) han mostrado que el salario relativo en Colombia ha tenido incrementos significativos para los trabajadores con mayor capacitación y experiencia, y ha evidenciado detrimientos en el salario de los trabajadores con menor nivel de educación. Asimismo, la realidad en Colombia muestra cómo el sector industrial no ha generado mejoras en las condiciones laborales, mientras la flexibilización laboral, cuyo antecedente principal es la Ley 50 de 1990, ha incrementado es el número de trabajadores independientes y temporales, los cuales ven disminuido su salario al tener que asumir personalmente el pago de seguridad social. Con la aplicación de la Ley 789 de 2002, trabajadores y trabajadoras redujeron sus ingresos, debido al recorte de pagos de horas extras, festivos, dominicales y recorte de la jornada nocturna. Con la Ley 797 de 2003 se aumentaron las semanas de cotización al sistema de pensiones<sup>2</sup>, hecho que prorrogó la jubilación de muchos trabajadores.

La cotización individual, además de reducir los ingresos reales de la población, aleja su posibilidad de acceder a una jubilación, mientras estos montos benefician a los fondos de pensiones privados y al sector financiero, quienes a pesar de la crisis mundial acumulan ganancias multimillonarias. Por otro lado, la reducción de contratos de trabajo y el aumento de formas precarias de vinculación laboral, como las cooperativas de trabajo asociado, han deteriorado la calidad del empleo en Colombia; desde 2002 se han creado 1.923 nuevas cooperativas con cerca de 350.000 empleados. En 14 años, entre 1992 y 2006, se redujo en un 40 % el número de trabajos permanentes en el sector industrial; en contraste, los contratos temporales aumentaron un 192 % en el mismo periodo. En el sector manufacturero, la reducción del trabajo permanente es de 10 % en apenas seis años, entre 2001 y 2007 (Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo y secretaría técnica corporación cactus, 2010).

La alta tasa de informalidad en el empleo se evidenció en 2009 con un 57,7 %, lo cual causó precariedad en los ingresos y falta de acceso a derechos como la seguridad social. Preocupan algunas situaciones violatorias del derecho al trabajo denunciadas por la Organización Internacional del Trabajo, la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo que viola el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, y la discriminación en el acceso al empleo por condiciones de raza, color y origen social. El informe aclara que estos indicadores son más alarmantes en algunos departamentos.

---

2 En Colombia, para tener derecho a la Pensión de Vejez, el ciudadano debe reunir las siguientes condiciones: 1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre. Desde el 1º de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre; 2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. A partir del 1º de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1º de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015 (Ver: Ley 797, 2003).

A pesar de que el salario mínimo en Colombia en 1991 era de \$51.720; en 2001, de \$286.000, y en 2013 es de \$589.500, pasó de tener un aumento del 26,07 % en 1991 a un 4,02 % en 2013. Si analizamos estas cifras de manera real, con relación a la inflación y a la devaluación del peso en las últimas dos décadas, el salario real se ha mantenido e incluso ha sido menor que en los períodos anteriores.

Los anteriores datos muestran cómo la productividad de los factores en Colombia no ha sido significativa en comparación con otros países, y que además no ha generado las condiciones de igualdad social promulgadas en los acuerdos comerciales, dado que no se han distribuido los beneficios de la producción al total de la población. Este aspecto se evidencia en el aumento de las utilidades de las empresas que exportan productos a Colombia, obtenidas por los beneficios otorgados en los tratados de libre comercio. Mientras que la inversión extranjera no ha sido un factor importante en la innovación de las empresas (Echevarría et al., 2006), muchas empresas multinacionales se encuentran explotando gran cantidad de recursos minero-energéticos, los cuales son devueltos a Colombia en forma de productos con alto valor agregado, incrementando sus utilidades en grandes proporciones, en detrimento de los ingresos de los trabajadores.

Esta situación nos muestra de qué manera los niveles de productividad laboral y multifactorial en Colombia, junto con las políticas comerciales, laborales y salariales, no han sido suficientes para generar una igualdad social y por ende un respeto hacia los derechos humanos, en este caso de la mayoría de la población trabajadora del país. Desde 2008 con el diseño del Conpes 3527<sup>3</sup>, se aprobó para Colombia la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la cual está en pleno proceso de aplicación y de la que se espera obtener los mejores resultados. Dicha política se presenta como todo un reto para mejorar las condiciones, tanto laborales de los trabajadores, como del desarrollo de la economía nacional y su competitividad a nivel mundial, teniendo presente la sostenibilidad ambiental como factor fundamental.

En esta medida, lograr los aumentos de productividad que generen condiciones de igualdad para la sociedad colombiana es un trabajo que tiene que ser construido por los diferentes sectores y actores de la economía nacional, y en el cual se debe dar la importancia a la soberanía nacional, y en el marco de los tratados de libre comercio, replantear lo negociado de manera que se beneficie en mayor medida la economía colombiana y sobre todo su población.

<sup>3</sup> Este documento elaborado por el Consejo Nacional de Política Económica, plantea los siguientes 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, (7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la competitividad.

## REFERENCIAS

- Arango, L., Posada, E. y Uribe, J. (2004, julio). Cambios en la estructura de los salarios urbanos en Colombia (1984 – 2000). *Borradores de Economía*, 297, 1-18. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra297.pdf>
- Clavijo, S. (2003, enero). Crecimiento productividad y la “nueva economía”: implicaciones para Colombia. *Borradores de Economía*, 228, 1-37. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/es/borrador-228>
- Colombia, Congreso de Colombia (1990). Ley 50 de 1990, “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”. Bogotá.
- Colombia, Congreso de Colombia (2002). Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del código sustantivo de trabajo”. Bogotá.
- Colombia, Congreso de Colombia (2003). Ley 797 de 2003, “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”. Bogotá.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2012). *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2008). *Documento CONPES 3527. Política nacional de competitividad y productividad*. Bogotá: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
- Echevarría, J., Arbeláez, M. y Rosales, M. (2006, febrero). La productividad y sus determinantes: el caso de la industria colombiana. *Borradores de Economía*, 374, 1-36. Recuperado de <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra374.pdf>
- Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo y secretaría técnica corporación cactus. (2010). *Informe Alterno al Quinto Informe del Estado Colombiano ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Bogotá: Gente Nueva Editorial.

# Editorial

*Joan Miguel Tejedor Estupiñán<sup>1</sup>*

## **Relationships between productivity and wages in Colombia**

One of the questions raised by some academics and researchers, economists and economic policy makers of different governments today is what criteria should we use to share benefits from economic growth, driven by increases in the productivity of production factors? This has led governments in different regions to set agendas of integration and to adopt economic policies that have affected both, the economy and the population in terms of equity and justice.

Clavijo (2003) distinguishes three important moments in the issue of productivity in Colombia. The first one in June 1988 and in charge of the administration of Virgilio Barco laid the foundations for the economic aperture. A second momentum was in the administration of César Gaviria, in the mid 1990's, which accelerated the process of trade liberalization, was characterized by an increased free import regime and thus a reduction of protectionist policies, which was evidenced by clearing the import surcharge. The third stage occurred in the administration of Ernesto Samper, where the subject of trade openness was replaced by the Social Pact, inspired in the wage and income policies, applied in the U.S.A. in the seventies, and in Mexico in the eighties. At that time, a Presidential Commission was created in order to reconcile the wage issues in regards to productivity.

In relation to economic growth, production in Colombia grew at an average rate of 2.6% in the period 1990-2002, between 2004 and 2011 it has grown at a rate of 4.8% (CEPAL, 2012), which according to Clavijo (2003), represents a poor performance of the national economy, in comparison with the average growth of 5.1% between 1950-1980. This shows

the deceleration phase suffered by the Colombian economy through 2002 and the apparent recovery since then, until 2011. This recovery has been increased by means of trade agreements with different countries and regions, such as the one between the U.S.A. and the European Union, and at the regional level, with the countries of the Andean Community, MERCOSUR and ALADI, which have increased imports of manufacture and technology, as well as exports of mineral and energy resources to said countries.

Labor and multifactor productivity in Colombia between 1950-1966 has been of the order of 1.6 %, between 1967-1974 increased to 3.2%, then began to slow down arriving between 1975 to 1980 to 0.3 %, even falling during the eighties to -3.0%. In the period 1990-2002, labor productivity was only 0.4 % per year, one of the lowest in Latin America. Meanwhile, between the decades 1950 and 1980 the multifactor productivity in Colombia was 0.8 % per year, and fell to an average of -1.5%, between 1981 and 2002. According to Clavijo (2003), this is evidence of poor performance of national productivity performance compared with 1.3% in Taiwan, South Korea, Singapore and Hong Kong and 1.2% in Indonesia, Malaysia, and Taiwan where educational policies play a key role.

---

<sup>1</sup> Master en Human Rights and economist, Editor of the *Revista Finanzas y Política Económica* from Universidad Católica de Colombia. E-mail: [imtejedor@ucatolica.edu.co](mailto:imtejedor@ucatolica.edu.co). Mailing address: Facultad de Economía, Universidad Católica de Colombia, Carrera 13 No. 47-49 (Bogotá, Colombia).

With respect to wages in Colombia, studies carried out by Arango et al. (2004) have shown that the relative wage in Colombia has had significant increases for workers better trained and with more experience, and has shown detriments in the wages of workers with lower levels of education. Likewise, Colombian reality shows how the industrial sector has not generated improvements in the working conditions, while labor flexibility, which main background is Law 50 of 1990, has increased the number of freelance and temporary workers, who observe how their salary decreases, having to personally assume their social security payment. With the application of Law 789 of 2002, workers reduced their income due to the reduction of overtime payments, holidays, Sunday and cut of the night shift. With Law 797 of 2003, contribution weeks to the pension system<sup>2</sup> were increased, a fact that extended the retirement age of many workers.

The individual contribution, in addition to reduce the real income of the population sets more distant their access to a pension, while those amounts benefit private pension funds and the financial sector, which despite the global crisis accumulate multimillion profits. On the other hand, the reduction of labor contracts and the increased precarious forms of employment relationship, such as worker cooperatives, have deteriorated the quality of employment in Colombia; 1,923 new cooperatives have been created since 2002 with about 350,000 employees. In 14 years, between 1992 and 2006, a reduction of 40% in the number of permanent jobs in the industrial sector was observed; in contrast, within the same period, temporary contracts increased by 192%. In the manufacturing sector, in just six years, between 2001 and 2007, permanent labor fell down to 10%. (Colombian human rights, democracy and development, and technical secretariat corporation cactus Platform, 2010).

The high rate of informal employment was evident in 2009, at 57.7%, which caused instability in income and lack of access to rights such as social security. There are worries regarding some situations that violate the right to work reported by the International Labor Organization, the wage gap between men and women, which violates the principle of equal pay for work of equal value, and discrimination in access to employment by race conditions, color, and social background. The report makes it clear that in some departments these indicators are alarming.

Although the minimum wage in Colombia in 1991 was COP \$51,720, in 2001, COP \$286,000, and in 2013 is COP \$ 589,500, it went from having an increase of 26.07% in 1991 to 4.02% in 2013. If we analyze these figures in a real way, in relation to inflation and devaluation of the Colombian Peso in the past two decades, real wages have remained and it is even lower than in previous periods.

The above data show that the factor productivity in Colombia was not significant in comparison with other countries, and that it has not generated the social equal conditions promulgated in trade agreements, since no production profits have been distributed to the entire population. This aspect is evident in the profits increase of companies that export to Colombia, obtained by the benefits granted under the Free Trade Agreements. While foreign investment has not been a major factor in the innovation

---

2 In order to qualify for Old Age Pension in Colombia, the citizen must fulfill the following conditions: 1. Be at least fifty-five (55) years old, for women, or sixty (60) years for men. As of January 1, 2014, the age will increase to fifty-seven (57) years of age for women, and sixty-two (62) years for men. 2. Have contributed a minimum of one thousand (1000) weeks at any time. From January 1, 2005, the number of weeks will increase by 50 and from January 1, 2006 it will increase by 25 each year up to 1300 weeks in 2015 (See: Act 797, 2003).

of companies (Echevarría *et al.*, 2006), many multinational companies are exploiting large amounts of mineral and energy resources, which are returned to Colombia in the form of products with high added value, increasing profits in large proportions, to detriment of the workers' income.

This situation shows us how the levels of labor productivity and multifactor in Colombia, along with trade, labor and wages, were not sufficient to generate social equality and therefore a respect for human rights, in this case most of the country's working population. Since 2008, with the design of CONPES 3527<sup>3</sup>, the National Competitiveness and Productivity Policy was approved for Colombia, which is in the implementation process and the best results are expected. This policy is presented as a challenge in order to improve both, the labor conditions of workers, and the development of the national economy and its global competitiveness, taking into account the environmental sustainability as a key factor.

To this extent, achieve productivity gains that generate equal conditions for the Colombian society is a job that has to be built by different sectors and actors of the national economy, and in which the importance should be given to national sovereignty, and in the context of free trade agreements, renegotiate at stake so as to benefit further the Colombian economy and especially its people.

---

<sup>3</sup> This document prepared by the National Economic Council, has the following 15 action plans to develop the National Competitiveness Policy proposal under the National Competitiveness System: (1) worldwide class sectors, (2) jump in productivity and employment, (3) competitiveness in the agricultural sector, (4) business formalization, (5) labor formalization, (6) science, technology and innovation, (7) education and job skills, (8) mining and energy infrastructure, (9) transportation and logistics infrastructure, (10) financial deepening, (11) tax simplification, (12) ICT (13) contract compliance (14) environmental sustainability as a competitive factor, and (15) institutional strengthening competitiveness.

## REFERENCES

- Arango, L., Posada, E. and Uribe, J. (2004, July). 1984-2000 Changes in the structure of urban wages in Colombia. *Drafts of Economics*, 297, 1-18. Retrieved from <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra297.pdf>
- Clavijo, S. (2003, January). Productivity growth and the “new economy”: implications for Colombia. *Drafts of Economics*, 228, 1-37. Retrieved from <http://www.banrep.gov.co/es/borrador-228>
- Colombia, Congress of Colombia (1990). Law 50 of 1990, “by which reforms to the Labor Code and other provisions are introduced.” Bogotá.
- Colombia, Congress of Colombia (2002). Law 789 of 2002, “by establishing rules to support employment and expand social protection, and some articles of the code substantive work are amended.” Bogotá.
- Colombia, Congress of Colombia (2003). Law 797 of 2003, “by which certain provisions of the general pension system provisions of Law 100 of 1993 are reformed and provisions for exempt and special pension regimes are adopted”. Bogotá.
- Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL, per its acronym in Spanish) (2012). *Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean*. Santiago, Chile: The United Nations.
- National Planning Department (DNP, per its acronym in Spanish) (2008). CONPES 3527. *National policy on competitiveness and productivity*. Bogota: Ministry of Commerce, Industry and Tourism.
- Echevarría, J., Arbeláez, M. and Rosales, M. (February 2006). Productivity and its determinants: the case of the Colombian industry. *Drafts of Economics*, 374, 1-36. Retrieved from <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra374.pdf>
- Colombian human rights, democracy and development, and technical secretariat corporation cactus platform. (2010). *Alternative Report to the Fifth Report of the Colombian State to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. Bogota: Gente Nueva Editorial.

# Editorial

*Joan Miguel Tejedor Estupiñán<sup>1</sup>*

## Relações entre a produtividade e os salários na Colômbia

Uma das perguntas propostas por alguns acadêmicos e pesquisadores economistas e pelos que definem as políticas econômicas dos diferentes governos na atualidade é a seguinte: com que critérios distribuir os benefícios obtidos do crescimento econômico, impulsionado pelo aumento na produtividade dos fatores de produção? Isso vem levando governos em diferentes regiões a estabelecerem agendas de integração e adotarem políticas econômicas que afetam tanto a economia quanto a população, em termos de equidade e justiça.

Clavijo (2003) diferencia três momentos importantes do tema da produtividade na Colômbia. O primeiro, em junho de 1988 e sob a administração de Virgilio Barco, fundou as bases para a abertura econômica. Um segundo momento se deu na administração de César Gaviria, a meados de 1990, no qual se acelerou o processo de abertura comercial, o qual se caracterizou pelo aumento do regime de livre importação e, consequentemente, uma diminuição das políticas protecionistas, o que se evidenciou no desmantelamento da sobretaxa de importações. A terceira etapa se deu na administração de Ernesto Samper, na qual se passou do tema da abertura comercial ao Pacto Social, inspirado nas políticas de ingressos e salários, aplicadas nos Estados Unidos nos anos 1970 e no México nos anos 1980. Aí se criou um conselho presidencial com o objetivo de conciliar os temas salariais em relação com a produtividade.

Com relação ao crescimento econômico, a produção na Colômbia cresceu a uma taxa média de 2,6% no período 1990-2002; entre 2004 e 2011 cresceu a um ritmo de 4,8% (Cepal, 2012), o que, segundo Clavijo (2003), representa um desempenho pobre da economia nacional ante o crescimento médio de 5,1% registrado entre 1950-1980. Isso nos mostra a etapa de desaceleração que sofreu a economia colombiana até 2002 e a aparente recuperação desde então, até 2011. Essa recuperação se deu no marco do aumento dos tratados comerciais com diferentes países e regiões como os Estados Unidos e a União Europeia, e no âmbito regional com os países pertencentes à CAN, Mercosul e Aladi, os quais aumentaram as importações de manufaturas e tecnologia, bem como as exportações de recursos minero-energéticos a esses mesmos países.

A produtividade laboral e multifatorial na Colômbia entre 1950-1966 foi de 1,6%; entre 1967-1974 aumentou a 3,2%; logo começou a se desacelerar e chegou entre 1975-1980 a 0,3%, até cair a -3,0% durante a década de 1980. No período de 1990-2002, a produtividade laboral apenas foi de 0,4% anual, sendo uma das mais baixas na América Latina. Enquanto isso, entre 1950-1980, a produtividade multifatorial na Colômbia foi de 0,8 % anual, e caiu a uma média de -1,5% entre 1981 e 2002. Segundo

---

<sup>1</sup> Mestre em Direitos Humanos e economista. Editor da *Revista Finanzas y Política Económica* da Universidade Católica da Colômbia. E-mail: jmtejedor@ucatolica.edu.co. Endereço de correspondência: Facultad de Economía, Universidad Católica de Colombia, Carrera 13 N. 47-49 (Bogotá, Colômbia).

Clavijo (2003), isso é evidência de um desempenho medíocre da produtividade nacional, comparado com os desempenhos de 1,3% de Taiwan, Coreia do Sul, Singapura e Hong Kong, e 1,2% da Indonésia, Malásia e Taiwan, onde as políticas educativas desempenham um papel fundamental.

Quanto ao salário na Colômbia, os estudos de Arango *et al.* (2004) mostraram que o salário relativo na Colômbia teve aumentos significativos para os trabalhadores com maior capacitação e experiência, e evidenciou detrimenos no salário dos trabalhadores com menor nível de educação. Além disso, a realidade na Colômbia mostra como o setor industrial não vem gerando melhorias nas condições laborais, enquanto a flexibilização laboral, cujo antecedente principal é a Lei 50 de 1990, vem aumentando o número de trabalhadores autônomos e temporários, os quais têm diminuído seu salário ao ter que assumir pessoalmente o pagamento de segurança social. Com a aplicação da Lei 789 de 2002, trabalhadores e trabalhadoras reduziram seus ingressos devido ao recorte de pagamento de horas extras, feriados, dominicais e recorte da jornada noturna. Com a Lei 797 de 2003, aumentaram-se as semanas de contribuição ao sistema de aposentadoria<sup>2</sup>, fato que adiou a aposentadoria de muitos trabalhadores.

A contribuição individual, além de reduzir os ingressos reais da população, afasta sua possibilidade de aceder a uma aposentadoria, enquanto esses montantes beneficiam os fundos de aposentadoria privados e o setor financeiro, os quais, apesar da crise mundial, acumulam lucros multimilionários. Por outro lado, a redução de contratos de trabalho e o aumento de formas precárias de vinculação laboral, como as cooperativas de trabalho associado, têm deteriorado a qualidade do emprego na Colômbia; desde 2002, já foram criados 1.923 novas cooperativas com aproximadamente 350 mil empregados. Em 14 anos, entre 1992 e 2006, reduziu-se em 40% o número de empregos fixos no setor industrial; em contrapartida, os contratos temporais aumentaram 192% no mesmo período. No setor manufatureiro, a redução do emprego fixo é de 10% em apenas seis anos, entre 2001 e 2007 (Plataforma colombiana de direitos humanos, democracia e desenvolvimento e secretaria técnica Corporação Cactus 2010).

A alta taxa de informalidade no emprego se evidenciou em 2009 com um 57,7%, o que causou precariedade nos ingressos e falta de acesso a direitos como a segurança social. Preocupam algumas situações que violam o direito ao trabalho denunciadas pela Organização Internacional do Trabalho, a brecha salarial entre homens e mulheres, o que viola o princípio de igual remuneração por trabalho de mesmo valor, e a discriminação no acesso ao emprego por condições de raça, cor e origem social. O relatório esclarece que esses indicadores são mais alarmantes em alguns estados.

Apesar de que o salário-mínimo na Colômbia em 1991 era de \$51.720 (equivalente a U\$27,44), em 2001, de \$286.000 (U\$151,72), e em 2013, \$589.500 (U\$312,73), passou de ter um aumento de 26,07% em 1991 para 4,02% em 2013. Se analisarmos essas cifras de maneira real, com relação à inflação e à desvalorização do peso nas últimas décadas, o salário real se manteve e inclusive é menor que nos períodos anteriores.

<sup>2</sup> Na Colômbia, para ter direito à aposentadoria, o cidadão deve: 1) ter cumprido cinquenta e cinco (55) anos de idade se for mulher ou sessenta (60) anos se for homem. A partir de 1º de janeiro de 2014, a idade passará a cinquenta e sete (57) para a mulher e sessenta e dois (62) para o homem; 2) ter contribuído mínimo mil (1.000) semanas em qualquer tempo. Desde 1º de janeiro de 2005, o número de semanas aumentou a 50 e, desde 1º de janeiro de 2006, aumentou em 25 cada ano até chegar a 1.300 semanas em 2015 (Ver: Lei 797/2003).

Os dados anteriores mostram como a produtividade dos fatores na Colômbia não vem sendo significativa em comparação com outros países e que, além disso, não vem gerando as condições de igualdade social promulgadas nos acordos comerciais, já que não se têm distribuído os benefícios da produção para a população. Esse aspecto se evidencia no aumento do lucro das empresas que exportam produtos para a Colômbia, obtidas pelos benefícios outorgados nos tratados de livre comércio. Enquanto o investimento estrangeiro não tem sido um fator importante na inovação das empresas (Echevarria et al., 2006), muitas empresas multinacionais se encontram explorando grande quantidade de recursos minero-energéticos, os quais são devolvidos à Colômbia em forma de produtos com alto valor agregado, aumentando seu lucro em grandes proporções, em detrimento dos ingressos dos trabalhadores.

Essa situação nos mostra de que maneira os níveis de produtividade laboral e multifatorial na Colômbia, junto com as políticas comerciais, laborais e salariais, não têm sido suficientes para gerar uma igualdade social e, consequentemente, um respeito aos direitos humanos, nesse caso, da maioria da população trabalhadora do país. Desde 2008, com o desenho do Conpes 3527<sup>3</sup>, aprovou-se para a Colômbia a Política Nacional de Competitividade e Produtividade, a qual está em pleno processo de aplicação e da qual se espera obter os melhores resultados. Essa política se apresenta como um desafio para melhorar as condições tanto laborais dos trabalhadores quanto do desenvolvimento da economia nacional e sua competitividade no âmbito mundial, tendo a sustentabilidade ambiental como fator fundamental.

Nessa medida, atingir o aumento de produtividade que gere condições de igualdade para a sociedade colombiana é um trabalho que tem que ser construído pelos diferentes setores e atores da economia nacional, e no qual se deve dar a importância à soberania nacional e, no contexto dos tratados de livre comércio, repropor o negociado de maneira que se beneficie em maior medida a economia colombiana e, sobretudo, sua população.

---

3 Este documento, elaborado pelo Conselho Nacional de Política Econômica, apresenta os seguintes 15 planos de ação para desenvolver a Política Nacional de Competitividade proposta no âmbito do Sistema Nacional de Competitividade: 1) setores de classe mundial; 2) salto na produtividade e no emprego; 3) competitividade no setor agropecuário; 4) formalização empresarial; 5) formalização laboral; 6) ciência, tecnologia e inovação; 7) educação e competências laborais; 8) infraestrutura de minas e energia; 9) infraestrutura de logística e transporte; 10) aprofundamento financeiro; 11) simplificação tributária; 12) TIC; 13) cumprimento de contratos; 14) sustentabilidade ambiental como fator de competitividade, e 15) fortalecimento institucional da competitividade.

## REFERÊNCIAS

- Arango, L., Posada, E. e Uribe, J. (2004, julho). Mudanças na estrutura dos salários urbanos na Colômbia (1984-2000). *Borradores de Economía*, 297, 1-18. Disponível em: <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra297.pdf>
- Clavijo, S. (2003, janeiro). Crescimento, produtividade e a “nova economia”: implicações para a Colômbia. *Borradores de Economía*, 228, 1-37. Disponível em: <http://www.banrep.gov.co/es/borrador-228>
- Colômbia, Congresso da Colômbia (1990). Lei 50 de 1990, “Pela qual se introduzem reformas no Código Substantivo do Trabalho e se ditam outras disposições”. Bogotá.
- Colômbia, Congresso da Colômbia (2002). Lei 789 de 2002, “Pela qual se ditam normas para apoiar o emprego e ampliar a proteção social e se modificam alguns artigos do código substantivo de trabalho”. Bogotá.
- Colômbia, Congresso da Colômbia (2003). Lei 797 de 2003, “Pela qual se reforma algumas disposições do sistema geral de aposentadoria previsto na Lei 100 de 1993 e se adotam disposições sobre os Regimes de Aposentadoria excepcionais e especiais”. Bogotá.
- Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) (2012). Anuário Estatístico da América Latina e do Caribe. Santiago de Chile: Nações Unidas.
- Departamento Nacional de Planejamento (DNP) (2008). Documento CONPES 3527. Política nacional de competitividade e produtividade. Bogotá: Ministério do Comércio, Indústria e Turismo.
- Echevarría, J., Arbeláez, M. e Rosales, M. (2006, fevereiro). A produtividade e seus determinantes: o caso da indústria colombiana. *Borradores de Economía*, 374, 1-36. Disponível em: <http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra374.pdf>
- Plataforma colombiana de direitos humanos, democracia e desenvolvimento e secretaria técnica Corporação Cactus. (2010). Relatório Alterno ao Quinto Relatório do Estado Colombiano ante o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bogotá.